

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (04) de junio de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	: MARIA EUGENIA ARENAS DAVID
DEMANDADO :	: APOYOS INDUSTRIALES S.A EXELA BPO S.A LABORALES MEDELLIN S.A EN LIQUIDACION
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO (AUTO)
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-006-2020-00197-01
RADICADO INTERNO	: 096-21
DECISIÓN	: CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 144

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir la decisión de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el **Decreto 806 de 2020**: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante instaura proceso ordinario en el cual solicita se DECLARE la existencia con base en la realidad de una única relación laboral regida por un contrato de trabajo a término indefinido entre la sociedad APOYOS INDUSTRIALES S.A. como empleador y MARIA EUGENIA ARENAS DAVID como empleada, y el incumplimiento de las obligaciones patronales por parte de las compañías APOYOS INDUSTRIALES S.A., y LABORALES

MEDELLIN S.A. respecto de su trabajadora la señora MARIA EUGENIA ARENAS DAVID. Así mismo se DECLARE que la trabajadora es objeto de discriminación por parte de las empresas codemandadas, al habersele ordenado disfrutar de vacaciones anticipadas sin ser solicitadas por la trabajadora y una vez concluido dicho periodo no habersele reubicado en un cargo de igual o mayor jerarquía al desempeñado. Se DECLARE la sustitución patronal de los trabajadores de la compañía APOYOS INDUSTRIALES S.A. frente a la compañía EXELA BPO S.A. donde fueron reubicados quienes no presentaban padecimientos de salud o restricciones y recomendaciones médicas y laborales, y en consecuencia de lo anterior se CONDENE de forma solidaria, conjunta o separada a las sociedades codemandadas al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de pagar como cesantías, intereses doblados a las cesantías, las primas, vacaciones, subsidio de transporte y caja de compensación familiar, y al reconocimiento y pago de los aportes a la seguridad social en salud dejados de pagar, cotizaciones al sistema de riesgos laborales, y las cotizaciones al fondo pensional Colpensiones desde el 01 de junio de 2019 y hasta cuando perviva el vínculo laboral, al pago de las indemnizaciones de los Arts. 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del C.S.T, y al pago de la indemnización de que trata el Art. 26 de la Ley 361 de 1997 por la obstaculización para su reubicación laboral.

De forma subsidiaria solicita se DECLARE la terminación del contrato de trabajo de la señora María Eugenia Arenas David por parte de la sociedad Apoyos Industriales S.A.S. en forma unilateral y sin mediar justa causa, y se CONDENE al reintegro laboral de la actora sin solución de continuidad a un cargo en igual o mejores condiciones de las que ostentó, sin solución de continuidad, al pago de los salarios, prestaciones sociales, primas, cesantías, intereses doblados a las cesantías, cotizaciones al sistema general de pensiones, y se CONDENE a las codemandadas de forma solidaria, conjunta o separada al reconocimiento y pago de la indemnización de que trata el Art. 64 del C.S.T, y las costas del proceso.

Dentro de la misma demanda se solicitó además medida cautelar con apoyo en lo regulado en el artículo 85 A del C.P.T y ss argumentando para ello lo siguiente:

“Dado que el representante legal de la empresa APOYOS INDUSTRIALES S.A. le ha manifestado a la actora que se encuentra pasando por un proceso económico deplorable, que lo llevó a sustituir

sus trabajadores en la empresa EXELA BPO S.A., lo que le ha impedido pagar a la demandante y otros trabajadores no reubicados por sus condiciones de salud sus salarios, prestaciones sociales, cotizaciones al sistema general de seguridad social en pensiones, salud, y riesgos. Es decir, que conforme las afirmaciones de la demandante y no pago de cotizaciones como está acreditado, se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, por lo que, con fundamento en ello, le solicito respetuosamente al Despacho la fijación de caución a cargo de APOYOS INDUSTRIALES S.A. en los términos del Art. 85A del C.P.T. y de la S.S. adicionado por el Art. 37A. de la Ley 712 de 2001”.

DECISION DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante providencia del 08 de abril de 2021, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, IMPUSO a la empresa Apoyos Industriales S.A. representada legalmente por el señor William Fernando Yarce Maya, caución en la suma de trece millones de pesos (\$13.000.000), para garantizar pago de eventual sentencia favorable a la señora María Eugenia Arenas David, precisando que dicha suma deberá constituirse en el término de cinco (5) días a partir de dicha decisión, so pena de no ser oído en el proceso.

IMPUGNACION.

El apoderado de la parte demandada Apoyos Industriales S.A, interpuso recurso de apelación manifestando que el artículo 85 del C.P.T fue creado para evitar que las empresas se insolentaran durante todo el proceso o por encontrarse en una grave situación. Que se manifiesta esa grave situación dentro todo el cuerpo de la demanda y la juez lo manifiesta que encuentra prueba suficiente para encontrar la grave situación en la que se encuentra la empresa y que dicha situación no es negada por dicho apoderado y representante legal de la empresa, y que es tan grave la situación que desde el año 2019 esta tratando de hacer una liquidación judicial y las cosas por la vía legal, donde la ultima solicitud tiene fecha de marzo de 2020, pero indica que es por las graves dificultades, indicando además que no se trata de insolventarse o de evadir las responsabilidades, y que un proceso de liquidación tiene sus ordenes jerárquicos en el cual se van saldando las cuentas, los pasivos que tengan que ver con el estado, los pasivos laborales, entre otros. Que además no cuenta con los recursos por parte de la empresa para pagar la caución. Que además nadie puede estar obligado a lo imposible, pues indica que si lo único que existía era cuenta Bancaria que hoy esta embargada y el otro patrimonio son las acciones, y que si bien se refiere a un certificado de cámara de comercio también aparecen

embargadas, es por lo que indica que no se puede obligar a nadie a lo imposible a pesar de que las pruebas y todo lo lleva a eso. Reitera que esta situación por la que atraviesa no es con el ánimo de insolventarse, que las graves dificultades existen, son evidentes y hay prueba suficiente, y que además cuando inicia el proceso de liquidación es porque no tiene la forma de sostener más su compañía porque no cuenta con los recursos ni los clientes y máxime si a la fecha lleva mas de un año que no pasa nada con esa empresa ni percibe unos ingresos, por lo que reitera que no tiene la suma ordenada por el despacho de \$13.000.000 como caución ordenada. Por lo anterior solicita se revoque la decisión de primera instancia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Una vez se dio traslado a las partes de conformidad con lo establecido en el Decreto 806 de 2020 para presentar alegatos, las mismas guardaron silencio al respecto.

CONSIDERACIONES

Es competente la Sala para conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutada de conformidad con lo establecido en el numeral 7) del artículo 65 del CPT y SS.

El problema jurídico en esta instancia se centra en determinar conforme a las razones aducidas en el recurso de apelación si hay lugar o no a decretar la medida cautelar solicitada conforme lo establece el artículo 85 A del C.P.T y SS.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

En primer término, debe indicarse que las medidas cautelares en los procesos ordinarios o declarativos son garantías que deben otorgarse en el transcurso del proceso o en diligencias previas a su iniciación, y que tienen como finalidad la protección del derecho en litigio para que una eventual condena no se haga ilusoria, o en otras palabras para que no se haga nugatoria el disfrute de los derechos reclamados.

Es por tanto un mecanismo de protección que el legislador establece en aras de garantizar la tutela judicial efectiva.

Concretamente con respecto a las medidas cautelares en los procesos ordinarios laborales establece el artículo 85 A del C.P.T y SS, adicionado por la Ley 712 de 2001, lo siguiente:

*ART. 85A.. **Medida cautelar en proceso ordinario.** Cuando el demandado, en juicio ordinario, efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, **o cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones**, podrá imponerle **CAUCIÓN** para garantizar los resultados del proceso, la cual oscilará de acuerdo a su prudente juicio entre el 30% y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar.*

En la solicitud, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, se indicarán los motivos y los hechos en que se funda. Recibida la solicitud, se citará inmediatamente mediante auto dictado por fuera de audiencia a audiencia especial al quinto día hábil siguiente, oportunidad en la cual las partes presentarán las pruebas acerca de la situación alegada y se decidirá en el acto. La decisión será apelable en el efecto devolutivo.

Si el demandado no presta la caución en el término de cinco (5) días no será oído hasta tanto cumpla con dicha orden. (Resalto de la sala).

Conforme al aparte transcrito se pueden establecer tres condiciones fácticas a saber: la medida procede cuando el demandado: i) Está efectuando actos tendientes a insolventarse, ii) Lleva a cabo actos tendientes a impedir el cumplimiento de la sentencia o, iii) **Se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones**. En el caso del último numeral, la apreciación debe hacerse por el juez, quien, una vez evaluadas las pruebas, tiene la posibilidad de considerar, si las dificultades que afronta el demandado revisten o no el carácter de gravedad o seriedad, exigidos por la norma.

Para el caso en concreto como lo indicó el juez de primera instancia considera la Sala que la razón por la cual es procedente la medida cautelar solicitada es en virtud a que según la prueba obrante en el expediente el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, por lo siguiente:

Obra a folios 75 a 78 del expediente digital, certificación de la cuenta de ahorros de la demandante donde se refleja un estado de cuenta desde diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019, y en la cual consta que inicialmente los pagos por nomina venían siendo realizados por la empresa apoyos industriales S.A, hasta marzo de 2019, y después de dicha fecha los mismos siguieron siendo realizados la empresa Laborales Medellín S.A, la cual según el certificado de existencia y representación aportados con la demanda, tienen el mismo representante legal, esto es, que tanto la empresa

Laborales Medellín S.A como Apoyos Industriales S.A tiene como representante legal al señor William Fernando Yarce Maya, las cuales además tiene la misma dirección de correspondencia y notificación judicial, esto es, la calle 25 A 43B 33 Medellín. Además de lo anterior debe tenerse en cuenta que según certificación de folios 53 la empresa Laborales Medellín S.A se encuentra en proceso de liquidación donde fue admitida en dicho proceso mediante auto Nro 610-002546 del 29 de noviembre de 2019, en el cual se designó como liquidador a Francisco de Paula Muñoz Grisales.

Se allegó además como prueba con la demanda (folios 58 del expediente digital que contiene los anexos de la demanda), certificación suscrita por Apoyos Industriales S.A del 16 de septiembre de 2019 donde consta que la demandante esta vinculada a dicha empresa desde septiembre de 2005 mediante contratos de obra o labor donde el ultimo de esos contratos fue iniciado el 07 de mayo de 2018 y se encontraba vigente para el momento de la certificación, esto es, para el 16 de septiembre de 2019.

Se aporta documento (folio 59 del expediente digital), donde se desprende que para el 01 de marzo de 2019 la empresa demandada Apoyos Industriales S.A comunica sustitución patronal con la empresa EXCELA BPO S.A, donde se precisa además que el contrato de trabajo que venia rigiendo con la empresa apoyos industriales S.A continuaría vigente con la nueva empleadora.

Así mismo se aporta otro documento visible a folios 60 del expediente digital que no fue tachado por la entidad demandada donde la empresa EXCELA BPO S.A, da la bienvenida a sus trabajadores.

A folios 61 del expediente reposa auto de la superintendencia de Sociedades del 21 de noviembre de 2019 de donde se desprende que la empresa Apoyos Industriales S.A solicitó tramite de liquidación judicial y que en el mismo se le rechaza la solicitud al no cumplir de forma completa con los requisitos exigidos para ello pese a las precisiones que ya habían sido realizadas por dicha superintendencia.

Obra igualmente certificación del 22 de julio de 2019, (folios 67 a 74) emitida por la EPS Cruz Blanca donde consta que la demandante se encuentra afiliada en dicha entidad desde el 31 de enero de 2002, y de donde se realiza

la siguiente anotación con respecto al empleador Apoyos Industriales S.A,
“mora 30 días-empleador sin pagos al día”

En el mismo sentido se aportó historia laboral de la AFP PROTECCION S.A, (folios 87 y ss), correspondiente a la señora María Eugenia Arenas David, con fecha de actualización para el 09 de junio de 2019, de la cual se desprende el pago de los aportes para pensión para la demandante solo hasta el mes de abril de 2019.

En el mismo orden obra a folios 99, certificado emitido por la EPS SURA generado el 22 de enero de 2020, en la que se indica que la demandante se encuentra afiliada a dicha entidad, pero que el estado de dicha afiliación es que se encuentra suspendido por la siguiente causa, “Inconstancia en pagos de cotización obligatoria”.

Además de lo expuesto es relevante para la sala advertir tal y como lo acepta el apoderado de Apoyos Industriales S.A en el recurso interpuesto sobre el hecho de que no se niega la grave situación en la que se encuentra la empresa para cumplir con sus obligaciones, por lo que concordado con la prueba antes relacionada al tenor de lo consagrado en el artículo 85 A del C.P.T se tiene que efectivamente la empresa demandada se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, razón por la cual deberá CONFIRMARSE la providencia de primea instancia que impuso la medida cautelar a cargo de dicha parte.

Sin costas en esta instancia por la forma en que se resuelve el recurso

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de primera instancia emitida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, que IMPUSO a la empresa Apoyos Industriales S.A. caución de conformidad con lo establecido en el artículo 85 A del C.P.T, según lo argumentado en la parte motiva de este proveído.

Radicado Único Nacional 05-001-31-05-006-2020-00197-01
Radicado Interno 096-21

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Las anteriores decisiones se notifican en ESTADOS

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ



GUILLERMO CARDONA MARTINEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 098 del 08 de junio
de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>